

ENTREVISTA



Foto: Ministerio de Energía

Ximena Rincón, ministra de Energía:

“Debemos hacernos cargo de la burocracia que ralentiza proyectos estratégicos”

Permisología, tarifas y electrificación minera: tres frentes que marcan la agenda de la nueva autoridad, a tres meses de su llegada al cargo. Por Horacio Acuña

En un contexto de creciente presión sobre el sistema eléctrico –marcado por el alza en la demanda, la incorporación acelerada de energías renovables y los desafíos pendientes en transmisión– el sector energético chileno enfrenta una etapa decisiva. A tres meses de haber asumido, la ministra de Energía, Ximena Rincón, ha delineado una agenda centrada en fortalecer la seguridad del sistema eléctrico, avanzar en la integración de energías limpias y dar mayor previsibilidad regulatoria al sector. En ese marco, tres frentes concentran buena parte de su atención: la agilización de permisos para proyectos estratégicos, la estabilización

de las tarifas eléctricas y la electrificación de la industria minera.

Desde su llegada al gabinete del presidente José Antonio Kast, la autoridad ha puesto énfasis en que estabilizar las tarifas eléctricas es “la prioridad número uno” de su gestión. El trasfondo es una deuda acumulada en el sistema cercana a los US\$900 millones, producto del rezago en la fijación tarifaria, el estallido social y la pandemia. Esa presión llevó a la cartera de Energía a postergar el alza en las cuentas de la luz prevista para abril, mientras se trabaja en proyectos de ley que permitan saldar los compromisos con las distribuidoras buscando evitar que el costo se

traslade directamente a las cuentas de los usuarios.

Uno de los cuatro ejes de su agenda regulatoria –presentada ante el Senado y en el seminario "Desafíos Regulatorios en Energía 2026-2030", organizado por la UC y Colbún– apunta específicamente a corregir las distorsiones en el segmento de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), que a su juicio han generado sobrecostos que terminan pagando los clientes. Su posición es clara: el objetivo no es frenar la generación distribuida, sino integrarla de forma ordenada y eficiente al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Por otro lado, antes de asumir el cargo, Rincón ya identificó la permisología como un factor crítico, señalando que la tramitación ambiental y de permisos puede significar siete o más años de demora, con el consiguiente desincentivo a la inversión y agravamiento del desacople entre zonas de generación y zonas de consumo. En ese frente, ha informado que su cartera avanza en medidas concretas para mejorar la certeza regulatoria y agilizar la tramitación de proyectos, resguardando al mismo tiempo los estándares ambientales y técnicos.

En esta entrevista con NME, la ministra Rincón aborda los principales desafíos de su gestión: desde la agilización de permisos para proyectos de generación y transmisión, hasta la coordinación con la industria minera para avanzar hacia una producción más sustentable con seguridad de suministro, pasando por las medidas para acelerar la participación de mujeres en el sector.

Ministra, usted ha planteado la importancia de generar condiciones para atraer inversión en el sector energético. En un contexto donde proyectos de transmisión y generación enfrentan procesos largos y complejos de permisos, ¿qué medidas concretas impulsará su cartera para mejorar la certeza

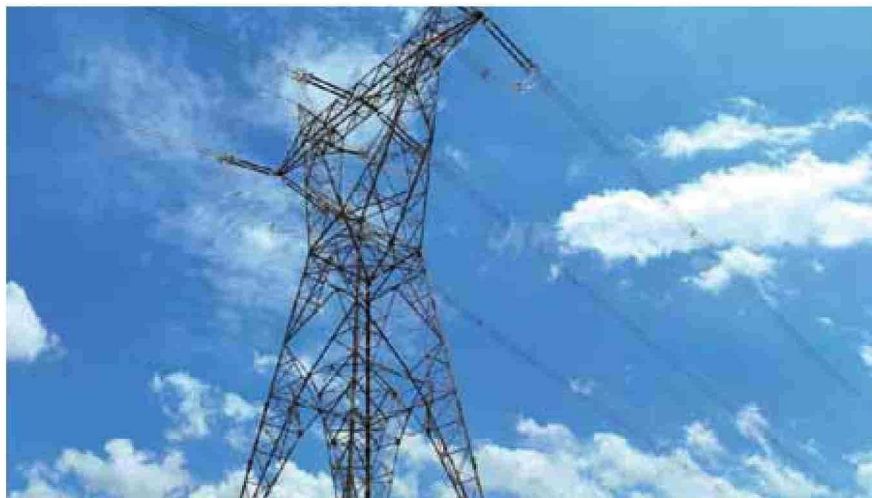


Foto: Foto: ISA InterChile

“Instruimos la creación de una fuerza de tarea para identificar los 50 proyectos que pueden ser acelerados y destrabados, con un potencial de más de US\$35.000 millones”.

regulatoria y agilizar la tramitación, resguardando al mismo tiempo los estándares ambientales y sociales?

Para impulsar la inversión, debemos hacernos cargo de las dificultades asociadas a la burocracia y a la incertidumbre normativa que han ralentizado proyectos estratégicos en el ámbito energético. Un ejemplo de esto es lo rápido que el Comité de Ministros dio luz verde a tres proyectos renovables que impulsan inversión por más de US\$1.000 millones, y que permiten el avance de la descarbonización de nuestra matriz energética. Para agilizar estos procesos se robustecerá la coordinación entre el ministerio, servicios públicos y organismos sectoriales, y fomentaremos que equipos técnicos se desplieguen en instancias clave de otorgamiento de permisos para agilizar su tramitación, pero siempre asegurando los más altos estándares.

Además, instruimos la creación de una fuerza de tarea entre la División de Desarrollo de Proyectos del Ministerio de Energía y la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (OASI) del Ministerio de Economía para identificar los 50 proyectos que pueden ser acelerados y destrabados en su tramitación en los diferentes organismos del Estado. Tenemos identificados los proyec-

“En los próximos diez años, Chile deberá invertir entre US\$30.000 y US\$40.000 millones en generación, transmisión y almacenamiento para sostener la transición energética. Esta magnitud convierte al sector en uno de los destinos de inversión más relevantes del país”.

“Vamos a seguir incentivando la inversión para mejorar nuestro sistema eléctrico, lo que se traduce en mejor calidad de vida para las familias de nuestro país e incluso, en un mediano a largo plazo, estabilización de las tarifas”.

tos y estamos trabajando en despa-
charlos hacia el Comité de Ministros
cuando corresponda, o hacer las
gestiones en los servicios públicos
en donde están tramitándose los
permisos pendientes.

Esto genera un potencial de más de
US\$35.000 millones en proyectos re-
lacionados con energía que podrían
ser destrabados, lo que representa
casi 1/3 de la cartera total de proyec-
tos que este ministerio monitorea.

Uno de los principales desafíos de la transición energética en Chile hoy radica en las limitaciones de transmisión y en el desarrollo insuficiente de almacenamiento, que han pasado a constituir cuellos de botella para un mayor despliegue de nuevos proyectos renovables. ¿Qué rol debiera jugar el Estado –y en particular el Ministerio de Energía– para acelerar el desarrollo de estas infraestructuras críticas?

Las señales de interés inversor en el sector energético chileno son sólidas, tanto a nivel de flujos de inversión extranjera directa como de cartera de proyectos.

En los próximos diez años, Chile deberá invertir entre US\$30.000 y US\$40.000 millones en generación, transmisión y almacenamiento para sostener la transición energética. Esta magnitud convierte al sector en uno de los destinos de inversión más relevantes del país.

En este mismo sentido, debemos reconocer que la burocracia y la incerteza normativa constituyen en sí mismas una presión sobre el sistema, al frenar proyectos estratégicos de generación, transmisión y almacenamiento. Reconocemos esta situación como uno de los nudos que debemos desatar con prioridad, en línea con el compromiso del presidente Kast de agilizar permisos durante los primeros 90 días de gobierno.

La cartera de proyectos de inversión extranjera totalizó US\$65.689 millones al cierre de 2025, un alza de 16,8% respecto de 2024 y un salto de 132% desde 2022. El sector ener-

gía concentra la mayor parte, con US\$36.817 millones del portafolio correspondiente a 2024. En empleo potencial, energía registró 3.304 puestos con una expansión anual del 157%, la más alta entre los sectores monitoreados. Asimismo, del total de la cartera, US\$16.246 millones ya están en proceso de materialización, lo que indica que una parte significativa del interés inversionista no solo es potencial, sino que ya se encuentra en ejecución.

Son números alentadores, pero no por eso nos vamos a detener aquí. Vamos a seguir incentivando la inversión para mejorar nuestro sistema eléctrico, lo que se traduce en mejor calidad de vida para las familias de nuestro país e incluso, en un mediano a largo plazo, estabilización de las tarifas.

La minería es uno de los principales consumidores de energía en Chile y un actor clave en la transición hacia una matriz energética más limpia, tanto por su alta demanda eléctrica como por su creciente adopción de energías renovables. ¿Cómo visualiza la coordinación entre el sector energético y la industria minera para avanzar hacia una producción más sustentable, asegurando al mismo tiempo costos competitivos y seguridad de suministro?

La minería del cobre es un gran consumidor energético de Chile, representando el 17,2% del consumo final del país y el 21,3% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero. Ante este escenario, la industria enfrenta la presión de cumplir con la Ley Marco de Cambio Climático para la neutralidad al año 2050 y adaptarse a exigencias internacionales como el mecanismo CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism o Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono). La urgencia es clara: mientras la International Copper Association (ICA) busca reducir las emisiones de alcance 3 entre un 60% y 70% para 2050, la demanda global de cobre se disparará de 26,7

Foto: Ministerio de Energía



“El cobre chileno no solo debe ser líder en volumen, sino también en baja huella de carbono para fortalecer su competitividad estructural”.

“La burocracia y la incerteza normativa constituyen en sí mismas una presión sobre el sistema, al frenar proyectos estratégicos de generación, transmisión y almacenamiento”.

Mt (millones de toneladas métricas) en 2024 a 34,1 Mt en 2040, impulsada por la electromovilidad y las energías renovables.

Para asegurar una producción sustentable y competitiva, la coordinación debe enfocarse en desplazar el 50% del consumo energético que aún es de origen fósil. Si bien los contratos PPA (Power Purchase Agreement o Acuerdo de Compra de Energía) ya cubren la otra mitad del consumo de las grandes mineras, el desafío radica en expandir la infraestructura eléctrica de bajas emisiones para absorber el aumento de la demanda productiva. Esta transición requiere una planificación estratégica que garantice la seguridad del suministro y costos controlados, permitiendo que la electrificación de las faenas no afecte la rentabilidad frente a competidores globales.

El camino hacia esta meta comenzó el 6 de octubre de 2025 con un acuerdo público-privado entre el Consejo Minero y los ministerios de Minería, Economía, Energía y Medio Ambiente, el cual nos parece una buena iniciativa. Esta alianza busca identificar

tecnologías para reducir emisiones en los tres alcances y proponer mejoras regulatorias que aceleren la adopción de soluciones limpias. Al consolidar esta hoja de ruta, Chile aspira a transformar su matriz productiva, asegurando que el cobre chileno no solo sea líder en volumen, sino también en baja huella de carbono para fortalecer su competitividad estructural.

El sector energético ha sido históricamente masculinizado. Más allá de señales iniciales, ¿qué medidas concretas impulsará su gestión para acelerar la participación de mujeres, especialmente en cargos de liderazgo y roles técnicos dentro de la industria?

La energía es un sector clave para el desarrollo de Chile y para enfrentar los desafíos de la transición energética. En ese contexto, el liderazgo y la participación de las mujeres no solo amplían las oportunidades y enriquecen la toma de decisiones, sino que también aportan una mirada diversa, responsable y cercana a las personas.

Dicho lo anterior, hemos trabajado desde el día uno para generar cambios estructurales y culturales progresivos para hacer del sector energético una industria más diversa y a la vez competitiva.

Hemos tenido un estrecho trabajo con el grupo Energía Más Mujeres, en donde se ha capacitado, por ejemplo, a instaladoras eléctricas, una profesión históricamente de mayoría masculina.

Desde dentro del Ministerio que-remos generar más instancias de participación en los gremios y en la generación de capital humano. Por eso estamos en proceso de reformular las iniciativas que desarrolla la actual Oficina de Género, reenfocándola a un trabajo dirigido hacia el capital humano, en donde se capacite a mujeres con habilidades críticas y necesarias para lograr la transición energética que Chile busca y necesita.